



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

En la Ciudad de Córdoba a _____ días del mes de _____ del año dos mil veintitrés, reunida en Acuerdo la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “G., GA. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y OTROS S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° FCB 5093/2021/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la Resolución de fecha 13 de octubre del 2022 dictada por el Señor Juez Federal de Río Cuarto que en dispuso: “1) *Rechazar la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad postulada por el Sr. G.A.G (...), en contra de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. 2) Imponer las costas por el orden causado (art. 68 –segundo párrafo del C.P.C.C.N.). Consecuentemente, corresponde el ingreso de la Tasa de Justicia, que se fija en el 3% de dicho valor, esto es la suma de \$ 3.636.800,48.-, debiendo cada parte ingresar el porcentaje del 50% en virtud de la imposición de las costas, bajo apercibimiento de ley. 3) Regular los honorarios profesionales del Dr. Facundo Clodomiro CARRANZA los que se fijan en 200 UMA que equivalen a la suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL (\$ 2.080.000), conforme Acordada N° 25/2022 de la CSJN que las fija en \$ 10.400. Regular los honorarios del Perito Contador Oficial Guillermo GANAME en 20 UMA equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL (\$ 208.000), con más el 10% en concepto de aporte a la Caja de previsión Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (art. 7 inc. b) punto 2 de la Ley provincial 8349/93 modificada por Ley 10.050/12, Ley 7626. Dichos honorarios, deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente regulación, conforme lo establecido en el art. 54 de la Ley 27.423. No corresponde regular honorarios a las letradas de la*

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

accionada conforme art. 2 Ley Arancelaria 27.423. 4) Protocolícese y hágase saber” (Fdo: Carlos Arturo Ochoa - Juez Federal).

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.-

El señor Juez de Cámara, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, dijo:

I.- Vienen las presentes actuaciones a estudio y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la Resolución de fecha 13 de octubre del 2022 dictada por el Señor Juez Federal de Río Cuarto que en dispuso: “1) *Rechazar la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad postulada por el Sr. G.A.G (...), en contra de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.* 2) *Imponer las costas por el orden causado (art. 68 –segundo párrafo del C.P.C.C.N.). Consecuentemente, corresponde el ingreso de la Tasa de Justicia, que se fija en el 3% de dicho valor, esto es la suma de \$ 3.636.800,48.-, debiendo cada parte ingresar el porcentaje del 50% en virtud de la imposición de las costas, bajo apercibimiento de ley.* 3) *Regular los honorarios profesionales del Dr. Facundo Clodomiro CARRANZA los que se fijan en 200 UMA que equivalen a la suma de pesos DOS MILLONES OCHENTA MIL (\$ 2.080.000), conforme Acordada N° 25/2022 de la CSJN que las fija en \$ 10.400. Regular los honorarios del Perito Contador Oficial Guillermo GANAME en 20 UMA equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL (\$ 208.000), con más el 10% en concepto de aporte a la Caja de previsión Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (art. 7 inc. b) punto 2 de la Ley provincial 8349/93 modificada por Ley 10.050/12, Ley 7626. Dichos honorarios, deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de quedar*

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

firmé la presente regulación, conforme lo establecido en el art. 54 de la Ley 27.423. No corresponde regular honorarios a las letradas de la accionada conforme art. 2 Ley Arancelaria 27.423. 4) Protocolícese y hágase saber” (Fdo: Carlos Arturo Ochoa - Juez Federal).

II.- Previo a todo corresponde realizar una reseña de la causa. El Sr. G., G.A. por medio de su letrado apoderado -Dr. Facundo Clodomiro Carranza- inicia la presente acción declarativa de inconstitucionalidad en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, solicitando se declare la inaplicabilidad al presente caso de la Ley N° 27.605 (B.O. 18/12/2020) del “*Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia*” (en adelante “LASE”), de su Decreto Reglamentario N° 42/2021 y la normativa complementaria dictada por la AFIP (Resolución General N° 4930/2021 y 4954/2021), por resultar violatoria de los derechos y garantías de raigambre constitucional, en particular los consagrados en los artículos 4, 14, 16, 17, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional. Explicita que el “*Aporte Solidario, Extraordinario y Obligatorio*” creado por la Ley 27.605, tal como ha sido calificado por el legislador, constituye un instituto *sui generis*, no asimilable, en principio y en forma directa, a ninguno de los conceptos que admite nuestra Constitución Nacional en su artículo 4, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 y 75, inc. 3 de la CN.

Sostiene que el denominado aporte solidario creado por el bloque normativo citado produce -en su aplicación al caso concreto- una afectación de su derecho de propiedad, en tanto absorbe una porción sustancial de la renta y de su patrimonio y, por ende, se torna confiscatorio a la luz de la doctrina emanada del Alto Tribunal. Explicita

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

que ello es así tanto si se lo analiza desde la perspectiva planteada por el propio Estado Nacional, esto es, como un recurso o contribución de naturaleza no tributaria que, al no reunir los recaudos consagrados por el art. 4 CN, se convierte en una expropiación sin pago de indemnización o en una confiscación de bienes, prohibida por el art. 17 CN; como si se lo analiza como un recurso tributario. En el último supuesto, porque constituye un agravamiento del impuesto patrimonial sobre bienes personales que ya rige en el sistema tributario argentino, todo lo cual genera además de la violación al derecho de propiedad ya mencionada, un salteamiento a la prohibición del principio de doble imposición y capacidad contributiva, excediendo todo límite razonable de desapoderamiento.

En subsidio, sostiene que el tratamiento discriminatorio establecido en el art. 3 de la Ley N° 27.605 respecto de la gravabilidad de las participaciones indirectas en sociedades locales en función de la condición de residencia del sujeto (argentino o exterior), deviene violatorio de los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad; así como también resulta reprochable el tratamiento diferencial dispensado en los arts. 5 y 6 a los bienes situados en el exterior, siendo esto violatorio de los principios de igualdad, razonabilidad, capacidad contributiva y legalidad en materia tributaria.

En definitiva, afirma que el aporte solidario excede en forma manifiesta y ostensible su capacidad contributiva y su patrimonio, en franca violación con los artículos 4; 14; 16; 17; 28; 38 y 75, incs. 2) y 22) de la Constitución Nacional. Concretamente explicita que, en el caso específico, el aporte le genera un perjuicio grave, irreparable y manifiesto, pues si se considera la “carga fiscal patrimonial total”, esto es

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

el efecto del aporte extraordinario obligatorio (AEO) con más el impuesto por bienes personales (IBP) (ingresado de forma personal e incluyendo también el gravamen ingresado por las acciones y participaciones societarias del país), los porcentajes de absorción de la renta neta ascienden a 2731% y 3256%, respectivamente, una vez deducido el correspondiente impuesto a las ganancias (IG) e impuesto cedular (IC) de corresponder. Acompaña prueba y formula reserva de Caso Federal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos comparece y contesta demanda mediante presentación de fecha 27/07/2021. En líneas generales niega los hechos y el derecho invocado. En concreto, manifiesta que el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia se trata, tal como lo especifica el título, de un aporte, no un impuesto, que tiene carácter excepcional y su creación se encuentra justificada por la CN, a la vez que tal como prevé la Ley N° 27.605, han encontrado expreso reconocimiento jurisprudencial. Explicita que, en el supuesto de la normativa en observación, la emergencia global provocada por la epidemia de COVID justificó su dictado y que el dinero que se recauda mediante el aporte tiene asignación específica y está destinado a paliar los efectos nocivos que la misma produjo.

Puntualiza que el AEO se distingue perfectamente del Impuesto a los Bienes Personales y no se superpone con lo que el actor tributa por este impuesto y que, si así fuera, la doble imposición no importa por sí misma, agravio constitucional. Sin perjuicio de ello, destaca que el AEO se diferencia del IBP por múltiples motivos que abarcan desde la diferente finalidad que posee cada uno, hasta la diferencia en la determinación de la base imponible. Agrega que, en general, se distingue de cualquier otra contribución o impuesto por la causal que le da

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

vida y fundamenta su creación, esto es, la emergencia sanitaria siendo un hecho notorio y de público conocimiento y por su carácter temporal, al respecto la norma es clara al establecer que el aporte constituye un pago a verificarse por única vez.

Finalmente, aclara que, en cuanto a la situación particular del actor, su análisis de lo que debería tributar de verse obligado a cumplir con lo exigido por la Ley N° 27.605 es parcial e infundado y no tiene en cuenta el carácter excepcional del aporte. Niega que en el caso en concreto posea carácter confiscatorio. Al respecto, explicita que el análisis de confiscatoriedad debe efectuarse a partir de la determinación e incidencia del aporte determinado por la Ley N° 27.605 respecto al patrimonio que posee el contribuyente y no en relación a la renta obtenida, porque es así como lo establece expresamente la norma. Refuerza que el AEO recae sobre la manifestación de capacidad contributiva del patrimonio a una fecha determinada, sin considerar el resto de las manifestaciones contributivas como son los Ingresos/Renta y el Consumo/Gastos. En base a lo expuesto, indica que resulta erróneo el análisis de confiscatoriedad que efectúa el contribuyente, puesto que basa sus argumentos en la incidencia que el aporte tiene sobre la renta obtenida durante los últimos años, cuando el cálculo debe efectuarse en relación al patrimonio declarado. En definitiva, solicita el rechazo de la demanda, con especial imposición de costas al accionante.

La sentencia dictada de fecha 13/10/2022 pone fin a la cuestión de fondo rechazando la demanda en todos sus términos. Para así resolver, toma en consideración que el aporte en cuestión no resulta confiscatorio en el caso concreto del Sr. G., G.A. y advierte la

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

existencia de un yerro en la base argumental de la confiscatoriedad utilizada por el actor como fundamento medular de su demanda, por cuanto cuestiona el impacto que el aporte único y extraordinario produce sobre su “renta”, cuando ese no ha sido el criterio seleccionado por el legislador para medir la capacidad contributiva del alcanzado por el mismo. A tal fin, explicita que *“... debe quedar claro que el cálculo del aporte se realiza a partir de considerar el valor de los bienes del actor existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley (conforme las pautas establecidas en la misma); por lo tanto, no se toma en cuenta “la renta” generada por dichos bienes en un período de tiempo determinado, sino que se considera el capital, esto es la valuación de los bienes al 18/12/2020 ...”*. Ello en el entendimiento que *“... el legislador ha considerado que la potencialidad económica ínsita en el patrimonio denota una expresión de riqueza apta para discernir sobre quienes debe efectuar este aporte extraordinario, destinado a paliar los efectos de la pandemia...”*.

En otro orden, hace hincapié en el carácter excepcional del aporte que resulta exigido por única vez.

En base a lo expuesto, concluye que, en autos, no luce acreditado que la aplicación de la normativa en crisis absorba parte sustancial del patrimonio del actor, ni que alcance valores aparentes o ficticios que degraden o lesionen su derecho de propiedad, destacando que el mismo tiene una incidencia del 3,08% respecto a un capital total valuado de \$ 3.933.258.110,97 (de conformidad a las cifras a las que arriba el Perito Oficial en su dictamen), por lo que dicho porcentaje de afectación no exhibe irrazonabilidad en los términos de la Ley 27.605, conforme las valoraciones efectuadas.

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Por último, agrega que la norma cuya validez se debate ha sido dictada por el Congreso de la Nación, resultando ajeno a la labor del Poder Judicial el juzgamiento acerca del mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, salvo cuando violan la CN y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico. Que la procedencia de la defensa intentada se encuentra supeditada a la acreditación del agravio constitucional invocado, que reitera, no fue suficientemente demostrado por el actor.

En lo que refiere a los planteos introducidos con carácter subsidiario, concluye que su tratamiento deviene inoficioso.

Por los fundamentos desarrollados, rechaza la demanda en su totalidad e impone las costas por el orden causado, atento lo novedoso de la cuestión.

III.- En contra del mentado decisorio, la parte actora deduce recurso de apelación, a cuyo fin expresa agravios mediante presentación de fecha 26/10/2022. Como primera cuestión, expone que el fundamento basado en la emergencia resulta arbitrario, en tanto tal situación de ninguna manera puede habilitar una violación de la propiedad privada sin ningún tipo de razonabilidad y sin previa indemnización. Manifiesta que la ley en análisis crea bajo la denominación de aporte, un verdadero impuesto, cuya causa jurídica es la captación de los bienes totales del sujeto obligado tomados como manifestación de su capacidad contributiva. Destaca que la irrazonabilidad de la solución adoptada se

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

configura al pasar por alto la situación particular del actor quien, al poseer la mayor parte de su patrimonio en acciones de sociedades comerciales, carece de liquidez para afrontar el pago del aporte y lo obliga a desprenderse de parte de su patrimonio para afrontar un impuesto que, calculado conforme la normativa vigente, afecta entre el 2731% y 3256% de su renta anual, todo lo cual configura un agravio constitucional.

En otro orden, sostiene que el fallo le causa agravio por cuanto concluye en la inexistencia de confiscatoriedad en el caso concreto, apartándose del criterio y porcentuales establecidos por la CSJN. Explicita así que el máximo tribunal, a través de reiterada jurisprudencia, determina la existencia de confiscatoriedad en los supuestos en que la carga impositiva afecta un porcentual superior al tercio de la renta anual y no, como expresa el magistrado en sus considerandos, cuando lo afectado es un 33% del patrimonio. Afirma que de la prueba aportada al proceso surge palmaria la desproporción, en tanto el aporte afecta -en el período 2020- un porcentaje superior al 2700% de la renta.

Se agravia también al entender que el magistrado de grado efectuó una errónea valoración de la prueba, en orden a considerar no acreditada la imposibilidad del actor para hacer frente al aporte extraordinario, extremo que asegura se verificó mediante informes técnicos y oficios.

Por último, considera agravante la falta de tratamiento de temas medulares, tales como la íntegra invalidez del aporte por constituir una exacción estatal no permitida constitucionalmente en los términos del art. 4 y 17 de la CN o su análisis como contribución y en tal

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

caso la vulneración de los principios constitucionales de legalidad, capacidad contributiva, efecto liberatorio del pago y no discriminación.

En definitiva, solicita se haga lugar al recurso incoado y se declare la inconstitucionalidad del bloque normativo impugnado en su aplicación al caso concreto. Formula reserva de caso federal.

A su turno, contesta agravios la Administración Federal de Ingresos Públicos (escrito agregado con fecha 10/11/2022). Solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada con imposición de costas a la apelante. En líneas generales, defiende la legalidad del bloque normativo cuestionado, bajo el argumento que el AEO resulta excepcional y su dictado se encuentra justificado por la emergencia global provocada por la epidemia de COVID. A más de ello, sostiene que lo recaudado a través de la percepción del referido aporte posee una asignación específica y se encuentra totalmente diferenciado del impuesto a los bienes personales.

Sustanciado el recurso, pasan los autos a decisión del tribunal.

IV.- En este estado, corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión sometida a estudio, circunscripta a la determinación de la constitucionalidad o no del régimen normativo impugnado por la actora para el caso concreto.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

En tal cometido, lo primero a dilucidar es la naturaleza jurídica que posee el denominado “*aporte extraordinario obligatorio*” creado por ley N° 27.605, debiendo en consecuencia, proceder al análisis del referido bloque normativo.

Así, el art. 1 de la **Ley N° 27.605** dispone: “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

Los sujetos alcanzados por el aporte son los enumerados en el art. 2, esto es, personas físicas y/o sucesiones indivisas que posean residencia en el país (inc. a) o en el extranjero (inc. b). La base imponible difiere según el sujeto posea o no residencia en Argentina, ya que, en el primer supuesto se constituye por la totalidad de los bienes que posee tanto en el país y en el exterior, mientras que, en el segundo caso, se conforma solo con los bienes existentes en el país, en ambos supuestos al 18/12/2020, y sin deducción de mínimo no imponible.

La finalidad de la norma se encuentra descripta en el art. 7 que contempla una asignación específica para el producido de lo recaudado a través del A.E.O. Concretamente, se destina un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; un 20% a subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas; un 20% al programa integral de becas Progresar; un 15% para el

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y un 25% a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural.

Por su parte, el art. 9 confiere a la Administración Federal de Ingresos Públicos la facultad de aplicación, percepción y fiscalización del aporte y dispone la aplicación subsidiaria de la Ley N° 11.683 y la Ley N° 27.430.

La referida norma fue reglamentada por el Decreto N° 42/2021 PEN, por las Resoluciones Generales N° 4930/21 y 4954/21 dictadas por la AFIP en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 9 de la Ley N° 27.605 y por las Resoluciones N° 15/2021 y N° 22/2021 dictadas por la Secretaría de Hacienda - Ministerio de Economía.

El Decreto N° 42/2021 establece las pautas de valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley N° 19.550 y reglamenta lo relativo a la repatriación de los bienes radicados en el exterior.

Por su parte, las Resoluciones de AFIP N° 4930/21 y N° 4954/21 reglamentan aspectos formales relacionados con las declaraciones juradas a presentar a los fines del ingreso del aporte y fija los plazos de vencimiento.

Por último, las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda incorporan el concepto al clasificador de recursos

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

por rubro creado por Decreto N° 866/92. Así, la Reoslución N° 15/2021 lo incorpora como ingreso tributario al rubro 11.2. No obstante, la Resolución N° 22/2021 deja sin efecto dicha clasificación y lo incorpora como ingreso no tributario en la clase “otros”, bajo el argumento que en la anterior reglamentación no se tuvo en cuenta el carácter de “aporte de emergencia” del recurso creado por la ley 27.605, ni la indicación de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal respecto a la apertura de una nueva partida ajena a Recursos Tributarios, dada su especificidad.

De un análisis pormenorizado del bloque normativo aludido, debo concluir que el denominado “*aporte extraordinario solidario*” reviste el carácter de tributo, en el sentido amplio que nuestro ordenamiento jurídico le asigna al término y no en el sentido estricto que le confiere la Resolución N° 22/2021.

En primer término, porque una interpretación armónica del articulado de la ley de creación -comprensiva de un análisis no solo literal sino también finalista- que parta del concepto de tributo entendido como “*Toda prestación patrimonial obligatoria establecida por la ley, a cargo de las personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados*” (Villegas 2003:151), permite concluir que se trata de un recurso tributario que el Estado Nacional exige en virtud de su poder de imperio, sin perjuicio que su pago sea requerido por única vez.

Además de lo expuesto, porque si bien la Resolución N° 22/2021 dictada por la Secretaría de Hacienda lo clasifica como un recurso no tributario (ver clasificador de recursos por rubro

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

establecido en el Decreto N° 866/92) nombrado en la clase 12.9 bajo la denominación otros recursos del tipo 12, lo cierto es que el mencionado decreto solo considera como recursos tributarios clasificados en el punto 11 a los impuestos y excluye del rubro, no solo al aporte solidario aquí analizado, sino también a las tasas y a las contribuciones, conceptos estos últimos de naturaleza tributaria. Al respecto, cabe recordar la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en cuanto dispone que, ante la sanción o creación de determinado instituto legal, “*se atenderá a los actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los términos que los consagre*” (“Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA c/T. del Fuego”, del 29/4/15, entre muchísimos otros). Es decir, debe prescindirse del “*nomen iuris*” y estarse a la verdadera naturaleza de la figura creada que, en el caso, se trata de un recurso tributario, por más esfuerzo que hagan las dependencias del Estado Nacional para demostrar lo contrario.

En virtud de lo expuesto, entiendo que corresponde asignar al Aporte Extraordinario Solidario el carácter de tributo, toda vez que la obligación dineraria puesta en cabeza de los sujetos mencionados en el art. 2 de la Ley N° 27.605, fue creada por el Congreso de la Nación en uso de las facultades que detenta, y en virtud de su poder de imperio, a los fines de cumplir con las funciones del Estado Nacional. Es por ello que la norma se ocupa de definir los diversos elementos del hecho imponible, tales como los sujetos, objeto, elementos territorial y económico, fijando las bases imponibles y las alícuotas, además de considerar la capacidad contributiva. Asimismo, confiere potestades al fisco a los fines de aplicar, percibir y fiscalizar el aporte, disponiendo la

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

aplicación supletoria de la Ley 11.683 y el Régimen Penal Tributario previsto en el Título IX de la Ley N° 27.430.

En definitiva, entiendo que la naturaleza tributaria del aporte extraordinario, surge ínsita del propio texto legal y dan cuenta de ello la estructura jurídica que posee la figura y las potestades (recaudatorias, fiscalizadoras y sancionatorias) acordadas al Fisco.

En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala II al concluir “... *contrariamente a lo señalado por el actor, el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, ostenta incuestionable naturaleza tributaria*”. (ver autos: “T., G.E.I. c/ EN - AFIP - Ley 27.605 s/Amparo Ley 16.986” FCB 12782/2021, sentencia del 14/02/2023). Continúa explicando que el aporte solidario se subsume en el concepto de tributo “... *en tanto se trata de una prestación -en el caso, en dinero-, que incide sobre el patrimonio singular del contribuyente, exigida por el Estado de manera compulsiva en ejercicio de su poder de imperio, y prevista en forma expresa por una ley formal emanada del Congreso Nacional -la ley 27.605-*” (ver fallo citado). En igual sentido, se pronunció el Jgado Federal de Corrientes en la causa FCB N° 1335/2021 de fecha 08/08/2022.

En virtud de la conclusión arribada, los agravios planteados por la recurrente para el supuesto en que se considere al aporte como una contribución no tributaria, devienen insustanciales.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

V.- Sentado lo anterior, corresponde analizar la constitucionalidad o no del referido aporte partiendo de su consideración como recurso tributario. En consecuencia, habrá que indagar si el mismo se ajusta a los límites constitucionales informales y materiales que conforman el llamado bloque constitucional.

La primera limitación al poder recaudatorio del Estado que la Constitución Nacional consagra radica en que la potestad tributaria, entendida como la facultad del Estado para crear tributos, debe ser íntegramente ejercida por medio de normas legales, siendo conocido como principio de legalidad o reserva. (NOVELLI, Mario Horacio, “*Los principios Generales de la Tributación en la Constitución Argentina*”, CRONICA TRIBUTARIA NUM. 122/2007 (121-135).

Explicita el Dr. Casás “*cuando la exigencia de ley formal material para disciplinar los aspectos sustantivos del Derecho tributario (creación, modificación, exención, derogación de tributos, y configuración de sus elementos estructurales) encuentra sustento explícito en la Constitución, y tal ordenamiento, por una clara diferenciación entre el poder constituyente y los poderes constituidos, reviste carácter rígido e inderogable por ley ordinaria, podemos afirmar que nos encontramos en presencia de un sistema jurídico en el cual impera en plenitud el principio de reserva de ley tributaria*”. (Casás, José Osvaldo, “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria.” Editorial Ad Hoc. Buenos Aires. 2005. Pág. 237).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Efectuado el examen formalde legalidad del denominado Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia, cabe concluir que el mismo se encuentra superado, por cuanto tuvo expresa previsión normativa en la Ley N° 27.605 -sancionada por el Congreso de la Nación de conformidad con el procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional-, reglamentada por Decreto N° 42/2021 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional y complementada por las Resoluciones N° 4930/21 y 4954/21 dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 9 de la citada ley.

Cuadra recordar que los motivos tenidos en cuenta por el legislador a los fines de la imposición del aporte en análisis, su conveniencia y/o modalidad exceden el ámbito de jurisdicción del Tribunal, quien debe limitarse a efectuar un control de razonabilidad y legalidad. En este sentido, el Máximo Tribunal tiene dicho: “... *escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293).*” (voto mayoritario en autos: “*Hermitage S.A. c/ Poder*

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Ley 25.0637/Proceso de Conocimiento”, cita fallos CSJN: 333:993).

En este contexto de legalidad, cabe recordar también lo sostenido por la CSJN en innumerables precedentes en orden a que la declaración de inconstitucionalidad constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico (Fallos: 302:1149; 303:1708, otros), por lo que, en definitiva, sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional, siendo la incompatibilidad con ésta absoluta (Fallos 249:51; 288:325;306:1597; 331:2068; 333:447, 331:2799, 331:2068, 330:3853, 330:2981, 330:2255, 330:1036,330:855, 329:5567, 329:5382, entre otros.).

Ahora bien, la legalidad se erige apenas como una garantía formal de competencia en cuanto al órgano productor de la norma, pero no constituye, en sí mismo, una garantía de justicia y razonabilidad en la imposición. Para ello, nuestra CN incorpora otros principios materiales como el de capacidad contributiva, proporcionalidad, generalidad y no confiscatoriedad que limitan la potestad tributaria en forma tanto directa como indirecta, garantizando en conjunto la no afectación de derechos constitucionales de los contribuyentes.

VI.- Corresponde ahora examinar si la aplicación de la Ley N° 27.605 en el caso concreto afecta los demás principios constitucionales del derecho tributario (no confiscatoriedad, capacidad contributiva, proporcionalidad, igualdad) y, por consiguiente, si

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

constituye una violación a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada consagrada en el art. 14 y 17 de la CN.

La capacidad contributiva es definida como la aptitud económica de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos públicos (VILLEGAS, Héctor, Manual de Finanzas Públicas, Ed. Depalma, Bs. As., 2000, p. 203). Denota una aptitud de las personas para pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza en la medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal (SPISSO, Rodolfo, Derecho Constitucional Tributario, Ed. Depalma, Bs. As, 2000, p.354). Si bien este principio no encuentra consagración expresa en la Constitución Nacional, deriva de una interpretación armónica de dicho plexo, ya que en los arts. 4; 16 y 75, al referirse a los tributos emplea una terminología que permite interpretar que la intención de los constituyentes fue que sean pagados equitativamente, según la capacidad económica de los ciudadanos.

Así, en el art. 4 se habla de de contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población, imponga el Congreso; en el art. 16 in fine, se dice que la igualdad es la base del impuesto y en el art. 75, inc. 2º, al otorgarse al Congreso la facultad excepcional de imponer contribuciones directas, se estipula que ellas deben ser proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Tal como indica Villegas, la noción de igualdad se refiere a la contribución de todos los habitantes según su aptitud patrimonial de prestación y la proporcionalidad, refiere a la cantidad de riqueza gravada. Afirma también que estos conceptos se refuerzan axiológicamente con el de equidad, que se opone a la arbitrariedad y que se entiende cumplido cuando la imposición es justa y razonable (ob. cit., p. 260).

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

En lo que al punto atañe, la CSJN ha expresado en reiterados precedentes que, en materia impositiva, el principio de igualdad refiere a la misma carga analizada en iguales circunstancias. Para ello, se exige la creación de categorías tributarias razonables (Fallos: 150:189; 160:247) y se veda la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas (Fallos: 149:417; 154:337; 156:352; 184:592; 195:270; 209:431; 210:322; 234:568). *“En efecto, desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que, en ciertas circunstancias puede ser tan injusto imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación como gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios”* (Del voto de los Dres. Rosatti y Maqueda en autos: “Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. s/ acción de inconstitucionalidad – medida cautelar” CSJ 4417/2015/RH1, sentencia del 19/11/20, cita fallo: 343:1688). Así las cosas, la creación de categorías tributarias no importa per se una violación del principio de igualdad. En efecto, la cláusula constitucional del art. 16 deriva a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguir y clasificar los objetos de la legislación.

Ahora bien, dicha creación debe ser estrictamente compatible con el principio de igualdad, no solo a condición de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo tratamiento (Fallos: 98:67; 320:1166), sino también -y es lo esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es que corresponda razonablemente a distinciones reales (ver autos: “García,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26/03/2019 Fallos: 342:411).

Asimismo, en lo que concierne a la interpretación de razonabilidad, cabe señalar que el establecimiento de un gravamen sobre los activos no resulta per se descalificable, siempre que -como tiene dicho la CSJN- la manifestación de riqueza que se pretende gravar sea actual (fallo “*Marta Navarro Viola de Herrera Vegas v. Nación Argentina - DGI*” sentencia del 19/12/89).

Por su parte, el principio de no confiscatoriedad, se erige como una garantía implícita, que se deriva del derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Argentina. El carácter confiscatorio de un gravamen no puede ser establecido sino como consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hechos que condicionan su aplicación y su incompatibilidad por tal motivo con la garantía constitucional de la propiedad no puede resultar sino de la prueba de la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:57).

Es jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación en materia de impuestos que gravan el patrimonio de una persona que, para declarar su inconstitucionalidad por confiscatorio, resulta indispensable que quien lo impugna pruebe la absorción por el tributo de una parte sustancial de las utilidades producidas por el inmueble gravado, a cuyo efecto se debe tener en consideración el rendimiento normal medio de una correcta explotación del fundo afectado, prescindiendo de la supresión o disminución de utilidades provenientes de circunstancias eventuales o de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

la inapropiada administración del contribuyente y que, a fin de precisar qué se debe entender por explotación adecuada o rendimiento normal del inmueble, ello implica el debido aprovechamiento de todas las posibilidades que puedan estar al alcance del común de la gente dedicada a esa especie de trabajo (SPISSO, Rodolfo R., “*Derecho Constitucional Tributario*” - Cuarta Edición, Ed. Abeledo Perrot, 2009, p. 345).

En definitiva, si bien en última instancia la CSJN remite -a los fines de analizar la confiscatoriedad- a la renta que produce el capital gravado, el porcentaje de absorción no se encuentra establecido de manera fija, sino que se analiza en función de las circunstancias especiales y particulares de cada caso en concreto. Así, en autos “*Droguería del Sud S.A. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires*” se ha dicho que para que la confiscatoriedad exista debe producirse una absorción, por parte del Estado, de una porción sustancial de la renta o el capital, y el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar de una relación racional estimada entre el valor del bien gravado y el monto del gravamen, requiriéndose una prueba concluyente a cargo del actor (ver dictamen del Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo, sentencia CSJN del 20/12/2005, DJ, 29/03/2006, 823; IMP, 2006-7, 957).

Como explicita la doctrina, la confiscatoriedad puede recaer sobre los flujos o rentas o sobre el stock o patrimonio. En relación a las rentas, se determinará si la tasa efectiva del impuesto aplicable es superior a la tasa teórica determinada por ley, y en todo caso ello la convierte virtualmente en confiscatoria. Cuando se analiza sobre el patrimonio, la ecuación se torna más difícil en tanto hay que

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

entender que un mismo patrimonio no puede ser absorbido en términos acumulativos en más de un 33% del total y menos aún, si se toma en consideración que el tributo produce una sumatoria de la tasa aplicada año tras año en los casos de impuestos determinados anualmente sobre un mismo patrimonio. La cuestión difiere cuando el tributo resulta aplicable por única vez, como sucedía en el supuesto del impuesto a la herencia, casos en que se fijaron parámetros diferenciales a los fines de la declaración de confiscatoriedad.

Ahora bien, en el supuesto en análisis, la cuestión se torna disímil incluso del último caso, en tanto se trata de un aporte exigible por única vez en razón de la causa de emergencia que le dio origen. En este sentido el Máximo Tribunal tiene dicho: *“Para que prosperen demandas de la naturaleza de la presente, es necesario probar la absorción por el tributo de una parte sustancial de las utilidades efectivamente producidas por el inmueble gravado, así como que aquellas constituyen el rendimiento normal medio de una correcta explotación del mismo, no disminuido por la inapropiada administración del contribuyente o por circunstancias eventuales”* (Sentencia del 31/10/1945. “Harilaos de Olmos, Adelia M. v. Provincia de Córdoba”) y también *“El derecho de propiedad que la Constitución garantiza es inconciliable, en circunstancias ordinarias, con el desapoderamiento a título de impuesto, de más de un 33% de la utilidad corriente de una correcta explotación de los inmuebles rurales”* (C.S.J.N Fallos 206:247, del 22/11/1946. “Sara Pereyra Iraola v. Provincia de Córdoba”).

Surgen así varios conceptos indeterminados como lo son la alusión *“parte sustancial de la renta o capital”* o

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

“rendimiento normal medio de una correcta explotación del bien gravado”, que deben analizarse a la luz de cada caso en concreto, en tanto no existe una respuesta absoluta.

Es así que la doctrina y la jurisprudencia han concluido en orden a la interpretación de los referidos conceptos, que la razonabilidad de los impuestos es materia circunstancial y, por consiguiente, debe apreciarse con exigencias de tiempo y lugar y de conformidad con las finalidades económico sociales de cada tributo; debiendo diferenciarse su análisis en situaciones especiales, por ejemplo, supuestos de tributos creados en tiempos de guerra o de crisis (Novelli, Mariano Horacio, ob. cit.), o como sucede en el caso, en tiempos de crisis económica o social.

De esta forma, analizada la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal cabe concluir que, para que prospere el agravio de confiscatoriedad, debe quedar demostrado que el gravamen excede la capacidad económica o financiera del contribuyente, una parte sustancial de la operación gravada y/o que medie una desproporcionada magnitud entre el monto de la operación y el impuesto pagado, todo lo cual debe ser analizado teniendo en consideración el contexto particular del sujeto y el contexto social en que fue dictado el tributo. (ver fallos 271:7; 268:56).

VII.- Puntualizados los conceptos, cuadra recordar que la recurrente cuestiona la constitucionalidad del aporte por considerarlo confiscatorio, bajo el argumento que supera el 33% de su renta anual. Esgrime que el punto neurálgico de discusión radica en determinar cuál es el criterio que debe aplicarse a los fines de medir la

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

confiscatoriedad, ya que -sostiene- que el utilizado por el magistrado de grado que mide el patrimonio, resulta insólito e irrazonable, y difiere de la doctrina sentada por la CSJN en sus precedentes.

Ingresando al tratamiento del agravio en concreto cabe precisar que la figura legal instaurada grava el capital, esto es, el patrimonio de los sujetos enumerados en el art. 2, en cuanto lo considera en sí mismo una manifestación de riqueza, siempre que se supere un determinado monto (\$ 200.000.000). Ello en tanto dispone la creación de un aporte extraordinario, a pagar por única vez de manera obligatoria, con fundamento en la situación de emergencia económica y sanitaria ocasionada por la pandemia, tomando como base de imposición el patrimonio de los sujetos mencionados en el artículo 2 al 18/12/2020.

En definitiva, el aporte en análisis fue creado como una medida de emergencia destinada a morigerar los efectos nocivos causados por la Pandemia Covid 19, razón por la que se le asignó una finalidad específica (art. 7). En tal contexto, el legislador impuso como carga para los sujetos alcanzados por la norma, abonar por única vez la suma que se determina en función de las alícuotas establecidas en los arts. 4 y 5.

De la redacción de la norma se observa que **el legislador consideró como exteriorización de capacidad contributiva el patrimonio total valuado a la fecha de corte.**

Teniendo en consideración que el aporte grava el patrimonio y no la renta, concebido este como exteriorización de riqueza,

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

las pautas a los fines de analizar la confiscatoriedad se basan en determinar si su aplicación importa una absorción que supere una parte sustancial del mismo o de la renta presunta que produciría en circunstancias normales y no por el contrario, en relación a la renta efectivamente generada por ese capital o patrimonio.

A más de ello, conforme lo especificado en el considerando anterior, también debe analizarse si la capacidad contributiva presumida por la norma para todos aquellos sujetos comprendidos en el art. 2, constituye en el supuesto del Sr. G., G.A. una manifestación cierta y actual de riqueza.

A tales fines, resulta imperioso analizar la prueba acompañada a la causa.

Así, conforme se desprende de la pericia contable oficial acompañada por el Cr. Guillermo Alberto Gáname - MT. N° 10-6073-9, la base imponible del aporte se integra por la suma de pesos \$ 3.933.258.110,79 y se compone por la suma de \$ 3.929.678.166 que son los bienes en el país y de \$ 3.579.944,97 de bienes en el exterior.

Cabe señalar que dichos importes, así como también los correspondientes al A.E.O. determinado resultan coincidentes con los declarados por el actor en la demanda y convalidados por la demandada en su contestación, no siendo éste el motivo de controversia. Por el contrario, el eje de discusión radica, como ya se adelantó, en determinar si el monto a ingresar en tal concepto, que ascendería a un total de \$ 121.226.682,90, resulta o no confiscatorio.

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Así las cosas, luego de un análisis acabado de la cuestión, estimo que no le asiste razón al recurrente por las siguientes razones.

En primer término, por cuanto computada la base de cálculo que -reitero- se constituye por el total de los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley y que se valuó (según pericial oficial) en un total de \$ 3.933.258.110,97, se advierte que el monto a ingresar solo insume un 3,08% de dicho capital, siendo ésta la manifestación de riqueza que el legislador pretendió gravar y no, por el contrario, la renta del actor, no luciendo para nada irrazonable dicho porcentual de conformidad con las pautas y las valoraciones efectuadas en el presente.

En definitiva, el monto a ingresar por el actor al Fisco no insume una porción sustancial de su patrimonio o capital, en los términos exigidos por la jurisprudencia reiterada de nuestro Máximo Tribunal de la Nación. No corresponde, tal como pretende el actor, que el cálculo se realice en consideración a la renta que dicho capital produce, debido a que lo grabado -reitero- no es la ganancia sino el capital.

Por otra parte, no puede soslayarse que la pericia producida, no importó una auditoría de las empresas en que participa el actor, razón por la que la información con que se cuenta es parcial. En efecto, la renta declarada al cierre del período 2020 según DDJJ que asciende a \$ 7.795.051,79 no incluye utilidades de las empresas en las que el actor participa. Ello lo confirma el propio perito, quien al inicio de

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

su informe explicita que su labor consistió en un análisis de la documentación suministrada por el actor, conjuntamente con la información obrante en el expediente, sin realizar una tarea de auditoría general sobre la información obrante en los libros de la firma “... *ya que ello implicaría una verdadera tarea de verificación y control, innecesaria a los fines del proceso* ...”. (ver informe pericial adjuntado a sistema informático lex 100). Ello se debe a que, tratándose de un gravamen sobre el patrimonio, las ganancias efectivamente producidas no constituyen la base de análisis, por lo que no se cuenta en autos con una prueba fehaciente de las mismas.

Por otra parte, tampoco luce acreditado por parte del actor que la carga fiscal que se le impone conlleve en la práctica un verdadero desapoderamiento patrimonial necesario para su cumplimiento. En efecto, no surge de la prueba acompañada que el actor posea una imposibilidad material para hacer frente al aporte solidario cuestionado en los términos exigidos por la Ley N° 27.605. En este sentido, se ha dicho que “... *más allá de la prueba necesaria a los fines de acreditar la afectación del derecho de propiedad —ya que esta resulta primordial de acuerdo con una consolidada doctrina de nuestro Máximo Tribunal—, la confiscatoriedad debe ser demostrada por quien la alega mediante una prueba concluyente. También resulta imprescindible acreditar la existencia del detrimento de la propiedad, es decir, que existe un desprendimiento de elementos patrimoniales para solventar el tributo que deba ingresarse a las arcas fiscales*” (Laura Karschenboim Feigelson, nota a fallo “Bodegas Esmeralda S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP - Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, cita online: TR LALEY AR/DOC/3771/2022, el subrayado me pertenece).”.

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Respecto al agravio relacionado con su falta de liquidez para hacer frente al aporte en razón de integrarse su patrimonio con mayoría de acciones, excede el marco de análisis en el presente, por cuanto como se dijo, el aporte extraordinario grava el patrimonio como exteriorización de riqueza y no la renta. A más de ello, la propia norma impugnada y su reglamentación, contempla mecanismos a los fines de la valoración del capital accionario (art. 1 del Decreto N° 42/2021). Allí dispone que el sujeto obligado a los fines de la valuación de sus acciones o participaciones en el capital de las sociedades en que participa, puede optar por considerar o bien, la diferencia entre el pasivo y el activo de la sociedad correspondiente al 18/12/2020 (inc. a), o bien el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a la fecha indicada (18/12/2020).

En relación a este punto, la actora -a los fines de justificar la falta de liquidez- se limita a afirmar que las sociedades comerciales que integra no distribuyeron dividendos, lo cual no resulta un argumento oponible en tanto se trata de una decisión societaria. Con ello quiero poner de resalto que, la falta de distribución invocada como justificativo de presunta iliquidez resulta infundada en tanto es una decisión financiera que se toma en el seno de cada una de las sociedades en las que el actor forma parte.

Por último, no puede olvidarse que el aporte analizado se trata de un pago único que se exige a determinados sujetos a los fines de paliar una situación de emergencia financiera y sanitaria causada por la pandemia desatada por el virus Covid 19. En tal contexto, no

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

puede perderse de vista los lineamientos sentados por el Dr. Rosatti en una reciente causa al decir que “...*Determinar si un tributo resulta confiscatorio, conlleva un escrutinio estricto no solo de su naturaleza y características singulares, sino también de las circunstancias de tiempo y lugar en el que es aplicado* (Fallos: 345:1187).

Que, en supuestos de emergencia, el Estado posee facultades para dictar normas viendo acrecentados sus poderes y la posibilidad de restringir derechos individuales, siempre claro está, que las medidas adoptadas no se constituyan en irrazonables y desproporcionales y que la emergencia sea real, que se persiga con la medida que exige un sacrificio mayor una finalidad pública o interés general y que sea transitoria, todo lo cual se encuentra cumplimentado en autos. En efecto, el aporte se creó por una ley del Congreso, posee una finalidad pública -esto es- disminuir los efectos nocivos que la pandemia produjo en el ámbito económico y sanitario y que afectó a la comunidad en general y en particular a sectores sociales más vulnerables y es transitorio, ya que se agota en un único pago.

Analizados los referidos parámetros en este caso en concreto, no advierto que el aporte extraordinario obligatorio a abonarse por única vez absorba una porción sustancial del patrimonio del actor, razón por la que concluyo que el mismo no resulta confiscatorio, ni por ende inconstitucional en el caso.

Como bien afirma el catedrático Sotelo Castañeda “*Así como no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que pica o muerde nos mata, no todo tributo que nos incomoda o es antitécnico o aún*

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

contraproducente, resulta jurídicamente confiscatorio. No todo lo que resta o disminuye la propiedad o riqueza de los individuos, expolia irrazonablemente o desmerece el derecho de propiedad. Sólo lo que viola o violenta el derecho de propiedad es verdaderamente confiscatorio ...” (SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo, “Notas Sobre El Principio de No Confiscatoriedad en Materia Tributaria”, Artículo publicado en Derecho y Sociedad - N° 29-316)-.

En efecto, tal como he sostenido en autos “FIGUEROA MINETTI, ROBERTO c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - A.F.I.P. s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO” (Expte. N°: FCB 1792/2021/CA1) aun cuando las sumas involucradas resulten notoriamente cuantiosas, ellas han de relacionarse con la importancia económica del sujeto que las cuestiona, siendo necesario que el solicitante demuestre en qué medida el pago del aporte puede poner en riesgo el giro normal de sus actividades o que el rechazo de la tutela solicitada le provoque un perjuicio económico irreparable.

VIII.- A más de lo expuesto, analizada la cuestión a la luz de la situación de emergencia global desencadenada a raíz de la epidemia de COVID declarada en un primer momento por el Congreso Nacional y luego por el PEN y reconocida luego por nuestro Máximo Tribunal y cuyos efectos se expandieron a nivel mundial, todo lo cual justificó el dictado de múltiples medidas por parte del Estado Nacional, entre ellas, la sanción de la Ley 27.605 objeto de análisis, que impuso el pago de un aporte extraordinario con carácter excepcional (a los sujetos cuyo patrimonio superare un determinado monto), cuyo producido se destinaría a paliar los efectos nocivos que la pandemia produjo en el ámbito económico, social y sanitario, especialmente en los sectores más





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

vulnerables de la sociedad, no advierto una desproporción de medio a fin en la medida adoptada, máxime teniendo en consideración que el aporte exigido conlleva para los sujetos obligados a la realización de un pago por única vez.

Esta misma línea argumental ha sido desarrollada por el suscripto en oportunidad de analizar la constitucionalidad de las normas de emergencia dictadas por el Estado Nacional en el ámbito de la seguridad social, al concluir que el análisis de los conceptos que inspiran la materia no pueden efectuarse aisladamente, sino dentro del marco de emergencia económica y sanitaria originada por la pandemia mundial por coronavirus COVID-19 “... donde el gobierno tuvo que llevar a cabo distintas acciones para mitigar la crisis, como fueron las políticas de transferencia monetaria para fortalecer el sistema de protección social, como fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Iniciativas que fueron complementadas por otro tipo de políticas, tales como programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria...” (autos: “Rodriguez, Susana Elena c/ Anses s/ Reajustes por Movilidad” FCB 7226/2020), resaltando además que todas las medidas restrictivas a los derechos patrimoniales de los particulares fueron provisorias, tal como sucede en el caso en que el pago del aporte extraordinario creado -reitero- en los supuestos de así corresponder, es por única vez.

En virtud de la totalidad de los argumentos expuestos, considero que corresponde rechazar el recurso incoado.

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

IX.- Por último, en relación al agravio expuesto referido a la doble imposición, la Corte Suprema ha dicho en reiteradas oportunidades que la doble o múltiple imposición, por sí misma, no es inconstitucional, ello en la medida en que cada uno de los tributos que configuran esa múltiple imposición hayan sido creados por entes políticos con competencia para ello (Fallos: 185:209; 210:276; 210:500; 217:189; 220:119; 243:280; 249; 657; 262:367). Lo cuestionable no es la doble o múltiple imposición, sino la circunstancia de que la misma afecte una porción sustancial de la renta del actor, o sea si esa doble o múltiple imposición resulta confiscatoria, todo lo cual quedó zanjado en los considerandos anteriores.

X.- Resta expedirme en relación a las costas del asunto las que atento la naturaleza de la cuestión objeto de análisis y el carácter novedoso de la misma, se distribuyen por el orden causado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 68, segundo párrafo del CPCCN.

A tal fin, se regulan los honorarios del Dr. Facundo Clodomiro Carranza por su actuación en la presente instancia, en un 30% de lo regulado en la instancia de grado (conf. art. 30 ley N° 27.423), no haciendo lo propio respecto de la Dra. María Soledad Durany, atento su condición de letrada a sueldo de su mandante (conf. art. 2 Ley 27.423). **ASÍ VOTO.**

La señora Jueza de Cámara, doctora LILIANA NAVARRO, dijo:





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, vota en idéntico sentido.

La presente resolución se emite por los señores jueces que la suscriben de conformidad a lo dispuesto por el art. 109 de Reglamento para la Justicia Nacional.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelación incoado por la parte actora en contra de la Resolución dictada con fecha 13/10/2022 por el Sr. Juez Federal de Río Cuarto y, en consecuencia, confirmar la misma en todo cuanto decide y fue motivo de agravio.

2.- Imponer las costas generadas en esta instancia por el orden causado, atento el carácter novedoso de la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCCN).

3.- Regular los honorarios del Dr. Facundo Clodomiro Carranza por su actuación en la presente instancia, en un 30% de lo regulado en la instancia de grado (conf. art. 30 ley N° 27.423), no haciendo lo propio respecto de la apoderada del Fisco - Dra. María Soledad Durany-, atento su condición de letrada a sueldo de su mandante (conf. art. 2 Ley 27.423).

4.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, bajen.

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CÁMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD”

ABEL G. SANCHEZ TORRES

LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
SECRETARIO DE CÁMARA

| |
|---|
| REGISTRADO – SALA “B” CLAVE SENTENCIA: FECHA SENTENCIA: |
|---|

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

**AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD”**

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

**AUTOS: “G., GA C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y
OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD”**

Fecha de firma: 30/08/2023

Alta en sistema: 04/09/2023

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA



#35623366#381618217#20230830110959460